

EMPRESAS



El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

F. MORENO

La relación entre el ministro Soria y la gran industria nacional está en horas bajas. La subasta de interrumpibilidad –el mecanismo por el que las fábricas perciben ayudas a cambio de desconectarse de la red cuando así lo exija el sistema eléctrico– acaba de repartir 500 millones de euros que se suman a otros tantos repartidos a finales del año pasado. Pese a haber recibido 1.000 millones en dos ejercicios, el sector está

descontento y su patronal, AEGE, quiere que el reparto de estas compensaciones se haga mediante otro sistema que asegure los precios del kWh a más largo plazo. Además, algunas empresas como Alcoa o Solvay aseguran no tener más remedio que replantearse sus inversiones en España, lo que ha desatado una batalla entre las empresas, los trabajadores, los gobiernos regionales y el propio ministerio. Un otoño caliente en toda regla.

Los 1.000 millones en ayudas eléctricas no frenan las quejas de Alcoa o Solvay, que amenazan con echar el cierre en España

Tira y afloja entre Soria y la gran industria

■ Nuria Díaz

La interrumpibilidad es el mecanismo por el que se compensa con bonificaciones a las grandes industrias por estar dispuestas a parar sus procesos productivos, o sea, desconectarse de la red eléctrica cuando el sistema lo necesite en caso de picos de demanda o incidencias. La realidad es que esto no ha sido necesario desde el año 2009 –en el que se usó cinco veces–, pero desde ese año, la cantidad que han percibido asciende a cerca de 3.000 millones de euros. Por eso, estos pagos han sido muy criticados, por ejemplo, por el sector de las renovables, que reniegan de su papel de culpables de inflar la tarifa eléctrica, cuando –señalan– otros sectores reciben compensaciones “por algo que no ocurre desde hace diez años, cuando se desplomó el consumo eléctrico”.

El propio Gobierno ha cambiado varias veces de opinión sobre qué hacer con estas bonificaciones. En su primer año de gobierno la mejoró en 200 millones, hasta 750 millones, pero luego la reforma eléctrica diseñada por el secretario de Estado de Energía, **Alberto Nadal** puso en jaque el polémico incentivo. El ministro de Industria, **José Manuel Soria**, dejaba caer que habría que reducir ayudas, primas y otros conceptos que recargan la tarifa eléctrica. La realidad es que, explica un experto del sector, el coste llegó a ser de 677 millones en 2013, lo que disparó las sospechas de las autoridades de Competencia Comunitaria de que eran ayudas de Estado. Finalmente, el compromiso con la

gran industria se mantiene aunque, eso sí, reduciendo esa partida. El año pasado, el Ejecutivo comenzó a diseñar un mecanismo que redujera las cantidades. Industria decidía al fin que en vez de adjudicar de manera directa las ayudas, se haría mediante una subasta con la intención de reducirlas en unos 200 millones. Así fue. Se realizaron subastas ordinarias en noviembre y extraordinarias en diciembre, que repartieron 500 millones entre la industria pesada. Este año, las subastas ordinarias se realizaron entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre y las adicionales o extraordinarias, el mismo día 3 de septiembre. Otros 500 millones de euros aproximadamente. “Si bien el sistema de interrumpibilidad no se ha utilizado en los últimos años –reco-

nocía el ministro, eso no implica que no pueda ser necesaria la utilización futura del mismo”. En total concurren 131 plantas a la subasta. Se adjudicaron en competencia los primeros 50 bloques de 5 megawattios y 4 de los 9 bloques de 90 MW. Los otros 4 bloques de 90MW se adjudicaron por asignación directa, según

Todos los años se realizan pruebas de interrumpibilidad. Pruebas aparte, la última vez que fue necesario utilizar este servicio en la Península fue en el año 2009, en el que se usó cinco veces

establecen las reglas de la subasta en los casos de falta de competencia. Pese a todo, el sector no está contento.

La patronal de los grandes consumidores de energía, que agrupa a 35 grandes industrias (**AEGE**) emitió un comunicado nada más conocerse los resultados en la que instaban encontrar otro sistema “que permita una visibilidad a medio plazo, con el objetivo de garantizar a la industria española un suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible”. El sistema –pese a que a muchas industrias les ha reportado más retribución que el año pasado, como es el caso de la papelera Europac que ha comunicado que ésta aumentará un 37% en 2016– no acaba de contentarlas. En

sus reivindicaciones han encontrado apoyo en el **PSOE** que considera que “el sistema de subastas de interrumpibilidad ideado por el Gobierno no cubre las necesidades de las empresas electrointensivas, lo que genera riesgo de deslocalización, y por ello propone modificar el sistema para hacer subastas que tengan una vigencia de tres años y que cuenten con una asignación presupuestaria de 600 millones anuales, con una nueva modalidad de distribución de 50Mw y más paquetes de 90 MW. Asimismo, plantean la posibilidad de promover la celebración de contratos bilaterales entre empresas y productoras, y reclaman más interconexiones eléctricas con la UE”. El propio presidente de REE, **José Folgado**, se ha mostrado en más de una ocasión a favor de establecer un horizonte más amplio para la asignación de ayudas ya que colaboraría en la planificación de las empresas.

Deslocalización

“Lo cierto –explica un experto– es que el peso de la gran industria es enorme”. “A nadie puede extrañarle que una empresa como **Alcoa**, con tres fábricas en el norte de España y que da empleo a miles de trabajadores, puede presionar a un Gobierno pidiendo que le aligere los costes energéticos”.

El año pasado, el gigante americano del acero aseguró estar abocado al cierre de las plantas de Avilés y A Coruña, que suman 800 trabajadores, cuando en la primera subasta de interrumpibilidad del mes de noviembre no obtuvo los incentivos que esperaba. A este anuncio siguieron unos días de alta conflictividad social en las fábricas, presiones de la **Xunta de Galicia** al gobierno central, ...finalmente el Gobierno realizó en diciembre una subasta extraordinaria, aunque en la del mes anterior ya se había adjudicado el volumen de megawattios habituales. Alcoa anunciaba tras la subasta que mantendría abiertas las plantas en cuestión.

Desde la compañía señalan que si bien el coste energético es un gran problema –según la oficina estadística europea (Eurostat), las industrias intensivas en consumo eléctrico tienen una diferencia de precio en España con el resto de Europa del 15%– no es el mayor.

El gran problema añadido es la situación del mercado del aluminio a nivel global. La cotización internacional que se fija en el mercado de Londres ha caído en lo que va de año un 25%. La razón principal son las exportaciones chinas. El país asiático ha incrementado su capacidad de producción que en 2015 ronda los 4,4 millones de toneladas, aproximadamente diez veces lo que se produce en España. “Han inundado el mercado y además tienen con bonificaciones y reducciones de IVA que hacen imposible la competencia” –señalan. “En estas condiciones, ya desde el año pasado, venimos informando a nuestros trabajadores de que la situación se ha agravado y de que estamos analizando el resultado de la subasta de este año y como va a impactar en 2016 y ya informaremos” –señalan desde la empresa.

Otro de los grupos que amenaza con echar el cierre en España es la química **Inovyn-Solvay**, (Barcelona). La empresa ha sido excluida de las subastas de interrumpibilidad porque entre febrero y marzo de 2014 incumplió “sistemáticamente” las órdenes de interrumpir el consumo eléctrico. Todos los años se realizan pruebas de interrumpibilidad. La compañía ya ha dicho que haberse quedado fuera pone en peligro la viabilidad de su planta de Martorell y sus 500 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos.

Precio del MW y empleo: un cóctel explosivo

■ En los últimos días, a cuenta de las subastas de interrumpibilidad, se ha vivido un verdadero revuelo político. El coste de la energía para los grandes consumidores se discute siempre con la espada de Damocles del empleo pendiente sobre las cabezas de las partes implicadas. El ministerio quiere reducir las bonificaciones a las grandes industrias,

pero la amenaza de éstas de echar el cierre a sus fábricas si el precio del kilowatio sigue minandoles la competitividad, no lo pone fácil.

Por si fuera poco, no se trata de una discusión ministerio-empresa, sino que además, siempre tiene algo que decir, como es lógico, el gobierno de la comunidad autónoma y del ayuntamiento donde

está ubicada la planta en problemas. Y es que el coste de que cierre una planta de estas características, como las de Alcoa o las de Inovyn-Solvay, es de entre 500 y 1.500 puestos de trabajo que desaparecen. Un coste humano, pero también político innegable.

Así, algunos presidentes autonómicos, como el de la Xunta de Galicia, **Alberto Núñez Feijoo**,

habrían presionado al Ejecutivo para que tomara medidas que impidieran que Alcoa abandonara sus plantas gallegas.

El ministro Soria ha defendido, cuando le echan en cara lo que puede ocurrir si las fábricas se cierran, que “el sistema de interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda eléctrica” y no “del empleo”.